

125-07.07

Santiago de Cali,

ASUNTO: Respuesta de fondo a requerimiento CACCI 1950 del 10 de mayo de 2021

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, recibió petición con radicación interna CACCI 1950 del 10 de mayo de 2021, en la que informaba:

“Presuntas irregularidades en los contratos CO-004-2020, C-006-2020, CAA-001-2021, C-012-2020, CPS-081– 2021, CONTRATO CPS-069–2021, CONTRATO CPS-064–2021, CONTRATO CPS-059–2021, CPS-003–2021, CPS-013–2021, CPS-023–2021, CPS-053–2021. Entre otras irregularidades de servidores públicos”

Una vez analizado el contenido del requerimiento citado, se procedió por parte de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, a solicitar al Municipio de Argelia-Valle del Cauca, mediante CACCI 1691 del 12 de mayo de 2021, la siguiente información:

1. Certificación de fuente de financiación de los contratos referidos en la petición.
2. Etapa contractual en la que se encuentran los contratos relacionados en el punto anterior.
3. Copia de la carpeta en todas sus etapas de los contratos relacionados en el punto 1.

El Municipio de Argelia, el 20 de mayo de 2021, respondió dicha solicitud, en la que evidencia que la fuente de financiación de los contratos antedichos de la vigencia 2021, corresponde a recursos del Sistema General de Participaciones, como se detalla a continuación:

Fuente	Porcentaje	Valor	Contrato
PDL SGP PG libre destinación	100%	\$ 17.500.000	CPS-059-2021
GPO SGP PG otros sectores menores a 25.000 habitantes	100%	\$ 21.000.000	CPS-023-2021
PGO SGP PG otros sectores menores a 25.000 habitantes	100%	\$ 15.000.000	CPS-053-2021
PGM SGP PG Otros sectores menores a 25.000 habitantes	100%	\$ 19.000.000	CPS-081-2021
PLD SGP PG Libre destinación	100%	\$ 16.150.000	CPS-069-2021
ROS Recursos del balance otros sectores menores de 25.000 habitantes	100%	\$ 24.500.000	CPS-064-2021
PGO SGP PG Otros sectores	100%	\$ 17.496.000	CPS-013-2021
PGO SGP PG Otros sectores	100%	\$ 24.477.636	CO-004-2020
PGO SGP PG Otros sectores	100%	\$ 24.500.000	C-012-2020



Fuente	Porcentaje	Valor	Contrato
PCU SGP cultura	100%	\$ 24.395.000	C-006-2020

Si bien es cierto el Municipio de Argelia es sujeto de control de la Contraloría Departamental del Valle, una vez analizada la fuente de los recursos, se observó que en virtud de lo establecido en el literal A) del artículo 29 del Decreto 403 de 2020, los contratos que hacen referencia en su requerimiento son financiados en un 100% con recursos del Sistema General de Participaciones, por lo que la competencia para conocer de las presuntas irregularidades de índole fiscal corresponde a la Contraloría General de la República Gerencia Colegiada del Valle.

Así mismo, se informa que lo relacionado a la queja disciplinaria, fue trasladada a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, para dar trámite a lo pertinente.

Sin embargo, dos contratos de los enunciados en su petición, tienen como fuente de financiación recursos propios; en relación con los cuales la Contraloría Departamental del Valle, da respuesta a los dos hechos narrados en los siguientes términos:

1. *“Obligaciones innecesarias y extrañas que adquirió la Alcaldía en el contrato CAA-001-2021 “CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA VALLE DEL CAUCA” ya que la comisaria de familia municipal, no cancelaba cánones de arrendamiento, asumió la responsabilidad mensual actual de \$ 975.000, lo más sorprendente es que el arrendador es un firme y evidente patrocinador de la campaña del alcalde actual, lo que genera al año un gasto del erario público de \$11.700.000., será que se está devolviendo el patrocinio? No existe informe técnico de necesidad que fundamenta el traslado, realizado por parte del secretario o director de departamento, con los respectivos análisis de satisfacción o encuestas realizadas a la comunidad para el cambio de lugar de la comisaría de familia municipal. El señor arrendador, participo y financio la campaña del actual alcalde municipal. No existe avalúo perital realizado por parte de perito inscrito en lonja para que el municipio identificara cuantos metros son los que se arrendan, cuánto vale el metro cuadro alquilado en dicho municipio, simplemente se dispuso un precio fijo sin realizar los respectivos estudios para alquiler de inversión pública en favor del patrocinador de la campaña del alcalde.”*

La Dirección Operativa de Participación Ciudadana, realizó una evaluación integral a la documentación recaudada, verificando que el Municipio de Argelia realizó pagos mensuales al arrendatario correspondientes a canon de arrendamiento por valor de \$975.000 pesos, los cuales incluían los servicios públicos domiciliarios e internet, obligación derivada del contrato de arrendamiento CAA-001-2021. Igualmente se observa en los estudios previos, la necesidad de la contratación con el fin de fortalecer la ubicación de la Comisaría de Familia, para que tuviera con sala de audiencias y espacio para la gestión y atención por parte de los funcionarios a la comunidad.

Ahora bien, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que: *“son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación”*. Subrayado fuera del texto. Conforme a lo anterior, se observa que la autonomía de la voluntad es



determinante para la existencia de los contratos estatales, en tal sentido, la Corte Constitucional señaló mediante Sentencia C-060 de 2001. Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz, lo siguiente:

“Si algún significado ha de dársele al principio de la autonomía de la voluntad, que estructura todo el régimen de contratación nacional (pública y privada), éste tiene que ver con la posibilidad de que sean los propios sujetos de la relación jurídica, quienes decidan el destino de su vínculo y obviamente los procedimientos y autoridades que habrán de resolver los eventuales desacuerdos; de esta forma se garantiza, no sólo el recto y libre ejercicio de la voluntad individual, sino el adecuado acceso a la administración de justicia.”

No obstante, a folio 14 mediante Resolución 025 del 9 de marzo de 2021, el Municipio de Argelia, justificó la contratación directa del proceso contractual CAA-001-2021, e invitó a las veedurías ciudadanas para ejercer control y vigilancia durante todas las etapas contractuales, igualmente se verificaron, analizaron y compararon del bien inmueble que se contrató para satisfacer las necesidades identificadas en los estudios previos.

2. “Contrato CPS-003 – de 20 de Enero de 2021

PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y OPERATIVAS COMO DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, REGISTRO DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN DE ARCHIVO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Cuantía: \$ 12.000.000

Termino: 162 días.

Al revisar las actividades determinadas en el contrato se nota que existen funciones misionales del secretario de planeación entregadas en el contrato, si ya las tiene el secretario, no se entiende la razón por la que en el estudio previo se manifiesta que no existe personal para hacerlo. La misma ley prohíbe que se confieran funciones misionales a contratistas de prestación de servicios, es una secretaria contratada por prestación de servicios, con excepción de algunas de ellas, las cuales en este caso no aplican, y se nota que la contratista es la que tiene funciones de naturaleza de planta, ya que para todo lo que debe realizar es obligatorio cumplir horario y más, recibir órdenes, y todas las demás de un contrato laboral, como si el Secretario no hiciera nada. Que desorden de contratación la que se observa en este municipio, con razón el secretario de planeación únicamente se le ve desayunado y tomando café en los locales comerciales del municipio, y las vías, maquinaria y vías del municipio abandonados, si se le encargaron la mayoría de funciones a la secretaria.”

En relación con este punto, se revisa el contrato CPS-003-2021, en cuyos anexos y soportes se evidencia que de acuerdo al Decreto 058 del 16 de diciembre de 2017, por medio del cual se actualiza el manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la Administración Municipal de Argelia, el Secretario de Planeación e Infraestructura, tiene como propósito principal *“liderar los procesos relacionados con la planeación socioeconómica del Municipio promoviendo la participación ciudadana y el control social en beneficio*



de una gestión transparente, de igualdad, sin discriminación, con especial atención a los grupos de población en situación de vulnerabilidad y garantizando el respeto y pleno ejercicio de los Derechos Humanos, desarrollando los programas, proyectos y obras de infraestructura que demanden el progreso local – Desarrollar acciones tendientes a mantener, mejorar, diseñar y construir la infraestructura de la ciudad para satisfacer las necesidades y requerimientos de la comunidad establecidos en el plan de desarrollo y el Plan Básico de Ordenamiento Territorial”, ahora bien, revisado el contrato que nos ocupa, se observa que el objeto contractual y las actividades específicas están relacionadas con el apoyo a la gestión dirigida a la realización de actividades asistenciales y operativas de la Secretaría de Planeación.

Así mismo, se analizaron los informes de contratista y supervisión y no se observó delegación tácita o explícita en funciones atribuibles al Secretario de Planeación e Infraestructura.

En este orden de ideas, la responsabilidad y cumplimiento por parte del contratista de prestación de apoyo están determinados en las cláusulas del contrato suscrito con la administración, en las cuales se pacta el objeto contractual, las obligaciones de cada una de las partes, las actividades a desarrollar, el término de ejecución del contrato, los informes o productos a entregar, las garantías que respaldan su ejecución, entre otros.

Es importante que la peticionaria tenga presente que, el Daño Patrimonial tiene ciertas características establecidas en el artículo 126 del Decreto 403 de 2020 que modificó el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 tal como a continuación se sustrae: **“Artículo 6o. Daño patrimonial al Estado.** Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo”.

De ese modo, es importante tener en cuenta lo esgrimido por el Honorable Consejo de Estado en Sentencia con radicado N° 68001-23-31-000-2010-00706-01 del dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017), Consejera Ponente MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ, que respecto a ello ha expresado:

“(…) RESPONSABILIDAD FISCAL - Daño patrimonial Es indispensable que se tenga una certeza absoluta con respecto a la existencia del daño patrimonial, por



lo tanto es necesario que la lesión patrimonial se haya ocasionado realmente, esto es, que se trate de un daño existente, específico y objetivamente verificable, determinado o determinable y ha manifestado en diferentes oportunidades que la responsabilidad fiscal tiene una finalidad meramente resarcitoria y, por lo tanto, es independiente y autónoma, distinta de la responsabilidad penal o disciplinaria (Subrayado fuera del texto original) que pueda corresponder por la misma conducta, pues lo que en el proceso de responsabilidad fiscal se discute es el daño patrimonial que se causa a los dineros públicos, por conductas dolosas o culposas atribuibles a un servidor público o persona que maneje dichos dineros, lo que significa que el daño patrimonial debe ser por lo menos cuantificable en el momento en que se declare responsable fiscalmente a una persona. En el presente caso, no existe duda, ni siquiera por parte de la actora de que en efecto hubo un daño patrimonial al Estado [...]. (...)"

De esta manera queda debidamente formalizado el diligenciamiento del requerimiento CACCI 1950 del 10 de mayo de 2021.

Finalmente, se le agradece su acción en beneficio del interés general y se le exhorta a ser partícipe, del control social articulado con el fiscal, a través de la presentación de denuncias, por los distintos medios de recepción de la C.D.V.C., entre ellos, la página web institucional www.contraloriavalledelcauca.gov.co y al correo electrónico contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co, dando a conocer un relato preciso de los hechos o irregularidades fiscales detectas, con una descripción puntual de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los mismos, en relación con el uso indebido de los recursos públicos, la mala prestación de los servicios públicos en donde se administren recursos públicos y sociales, la inequitativa inversión pública o el daño al medio ambiente, que ameriten credibilidad o que se encuentren soportadas en medios probatorios que permitan iniciar la acción de competencia fiscal.

Cordialmente,

Martha I. Gutiérrez

MARTHA ISABEL GUTIERREZ SEGURA
Directora Operativa de Participación Ciudadana

Copia: contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Daniela Blandón Prado	Profesional Universitario	DBP
Revisó	Martha Isabel Gutiérrez Segura	DOPC	MIGS
Aprobó	Martha Isabel Gutiérrez Segura	DOPC	MIGS
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigente y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

